

CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Bogotá D.C., 25 de julio de 2022

Doctor

Secretario General
Senado de la República
Ciudad

PLNº 56/22

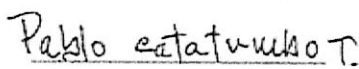
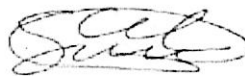
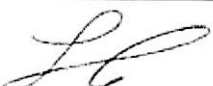
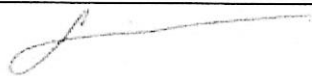
Asunto: Radicación del proyecto de ley Estatutaria: *"Por medio del cual se crea la Jurisdicción Especial Agraria y se dictan otras disposiciones."*

Respetado Secretario General:

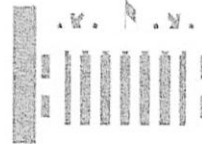
En cumplimiento de nuestro deber constitucional y legal, y actuando en consecuencia con lo establecido en la Ley 5ª de 1992, en nuestra calidad de Congresistas de la República, radicamos ante su despacho, para que se inicie el trámite legislativo respectivo, el siguiente proyecto legislativo:

Proyecto de ley "Por medio se crea la Jurisdicción Especial Agraria y se dictan otras disposiciones".

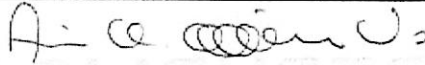

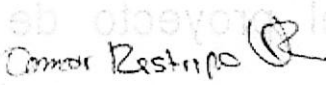

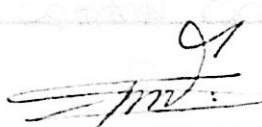
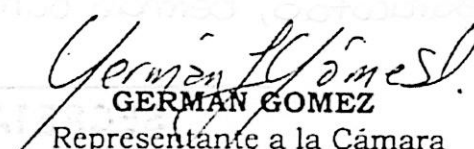
Por los honorables congresistas,

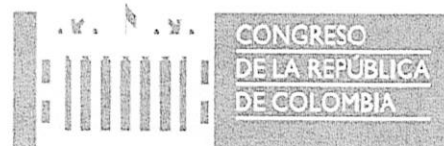
 PABLO CATATUMBO Senador de la República	 SANDRA RAMIREZ Senadora de la República
 JULIÁN GALLO CUBILLOS Senador de la República	 CARLOS ALBERTO CARREÑO Representante a la Cámara

BANCADA
COMUNES



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

 LUIS ALBERTO ALBÁN Representante a la Cámara	 JAIRO REINALDO CALA Representante a la Cámara
 OMAR DE JESÚS RESTREPO Representante a la Cámara	 IMELDA DAZA COTES Senadora de la República Partido Comunes
 PEDRO BARACUTADO Representante a la Cámara Partido Comunes	 GERMÁN GÓMEZ Representante a la Cámara Partido Comunes



PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO _____ DE 2020 SENADO

"Por medio del cual se crea la Jurisdicción Especial Agraria y se dictan otras disposiciones."

"El Congreso de Colombia,

Decreta":

CAPÍTULO I

Objetivo General, Definiciones Específicas, Principios Rectores

Artículo 1. Creación y finalidad de la Jurisdicción Especial Agraria. Créase la Jurisdicción Especial Agraria a la que corresponderá, en forma exclusiva, conocer y resolver los conflictos que se originen en las relaciones de naturaleza rural y agraria, los que Deriven de la propiedad, posesión u ocupación de predios rurales y bienes agrarios, los relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra y el territorio; promover la regularización de la propiedad rural, lo relacionado con las actividades agrarias de producción, transformación, y enajenación de productos agrícolas, en cuanto estos últimos no constituyan actos mercantiles ni que de tales relaciones emanen de un contrato de trabajo.

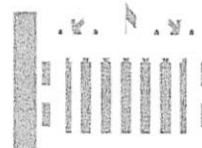
Asimismo, serán de su conocimiento y decisión las controversias que suscite la aplicación de las disposiciones que regulen la conservación, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos naturales renovables de índole agraria y la preservación del ambiente rural.

En general, conocerá esta Jurisdicción Especial de los conflictos que surjan con aplicación de disposiciones de índole agraria, aunque estén contenidas en ordenamientos legales distintos de los agrarios, incluyendo los mecanismos definidos por las comunidades rurales para la resolución de conflictos, además realizará seguimiento a las políticas en materia rural, desarrolladas en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La Jurisdicción Especial Agraria tendrá competencia en todo el territorio nacional. La Jurisdicción Especial Agraria comenzará a regir en los territorios priorizados para la implementación de los PDET a partir de la promulgación de la presente Ley. Su ampliación progresiva a todo el territorio nacional se dará en un término no mayor a 3 años.

Artículo 3. Definiciones. Son definiciones de la presente Ley y rigen para su implementación, las siguientes:

- a. **Campo.** La realidad geográfica, regional, humana, cultural y económica, que por lo mismo está llamada a recibir una especial protección del Estado, por los valores que en sí misma representa. El campo es un conjunto de tierras destinadas a la actividad agropecuaria, el espacio natural de la población rural, fuente natural de riqueza del Estado y sus ciudadanos.
- b. **Ruralidad.** Ámbito socioespacial que por sus componentes específicos permite la recreación de relaciones comunitarias en las que se desarrollan y preservan valores y saberes culturales que le diferencian de lo urbano. Estos componentes tienen que ver con la vocación y los usos del suelo para fines agropecuarios, ambientales y de conservación, así como con las formas de tenencia de la tierra y su relación con las prácticas de dichas comunidades.
- c. **Comunidades Rurales.** Aquellas comunidades que habitan el campo y derivan su subsistencia y preservación cultural y social a través de las relaciones vecinales y comunitarias distintas a las relaciones establecidas en lo urbano. Las comunidades rurales para la presente Ley serán entendidas como las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habitan en zonas que no hacen parte de grandes urbes o ciudades capitales.
- d. **Campesino/campesina.** Un campesino es un hombre o mujer con una relación directa y especial con la tierra, sustentada en memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de identidad y pertenencia de la cultura campesina. Los campesinos se dedican a la producción de alimentos, cuidado de la biodiversidad, bienes comunes y materias primas a través del trabajo propio y de otras formas de organización del trabajo a pequeña escala articuladas sobre la vida familiar, comunitaria o vecinal.



Este concepto incluye a pequeños agricultores, ganaderos a pequeña escala, guardianes de semillas, pescadores artesanales, pequeños mineros tradicionales, artesanos rurales, cazadores por supervivencia, recolectores, trabajadores agrarios, personas que derivan su sustento de la agricultura familiar y a pequeña escala, colonos tenedores de pequeñas extensiones de tierra, y otros sujetos con actividades e identidades similares, cuyas actividades se ejercen en armonía con su entorno natural y el subsuelo, quienes además construyen relaciones políticas y culturales en el territorio.

El término campesino también se aplica a las personas sin tierra, que no obstante esta condición, derivan su sustento del trabajo agrícola, pecuario, artesanal y construyen relaciones e identidades comunitarias en los entornos rurales de los que hacen parte.

- e. **Empresas Comunitarias, Cooperativas, Asociaciones y otras Entidades de la Economía Solidaria.** Son asociaciones de diversa índole organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores. Son creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes características.
- f. **Hacinamiento productivo Potencial.** Hacinamiento Productivo Potencial (HPP) es la Relación entre el número de familias en el territorio y la cantidad de Unidades Agrícolas Familiares disponibles. Cuando se reporta HPP para un sector rural específico, es porque al asumir una distribución del área en Unidad Agrícola Familiar (UAF) proporcional al número de habitantes del territorio, dónde se supone debe existir una relación teórica de equilibrio $1 \text{ UAF} = 1 \text{ Familia}$, se advierte que el número de familias es superior al número de Unidades Agrícolas Familiares en esa área rural.
- g. **Justicia Ambiental.** Es el tratamiento justo y la participación activa de todas las personas y comunidades rurales, campesinas, afrodescendientes e indígenas con respecto al desarrollo de Leyes, reglamentos, planes, programas y políticas ambientales. La justicia ambiental supone que ninguna comunidad ni individuo debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas que son resultado de operaciones industriales o extractivas con fines comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas.

Artículo 4. Principios. La presente Ley se regirá íntegramente por los principios constitucionales, especialmente los que tienen que ver con las garantías efectivas del debido proceso, la protección del campo y de las comunidades rurales, así como por los lineamientos internacionales en torno a la misma materia.

Se consideran, además, principios de la Jurisdicción Especial Agraria los establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en lo que tiene que ver con la Reforma Rural Integral y, de manera específica, los siguientes:

1. Uso prevalente de mecanismos alternativos y participación comunitaria rural. Las autoridades competentes velarán por el uso prevalente de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos definidos por las comunidades rurales.
2. Reconocimiento cultural agropecuario. Se reconocen y garantizan los derechos, valores, tradiciones, formas de producción y prácticas culturales individuales y colectivas de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes respecto al uso de la tierra.
3. Prevalencia de la presencia territorial. Las autoridades administrativas y judiciales que conozcan de los procesos de la Jurisdicción Especial Agraria garantizarán su presencia en las zonas en las que se tramiten asuntos de su competencia, y allí adelantarán las diligencias a que haya lugar.
4. Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, pertenencia étnica, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las actuaciones que se surtan a través de la presente Ley contarán con dicho enfoque. En las actuaciones administrativas y judiciales las autoridades promoverán la participación especial de estas poblaciones.
5. Enfoque de género. Se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas, entre otros. En las actuaciones administrativas y judiciales las autoridades promoverán la participación especial de las mujeres rurales sin discriminación alguna.
6. Bienestar y buen vivir. Condiciones de vida basadas en la erradicación de la pobreza y la plena garantía de los derechos de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, reconociendo y respetando su diversidad étnica, cultural y de género, y en aplicación del enfoque territorial, y garantizando la conservación de la estructura ecológica principal.

7. Restablecimiento. La Jurisdicción Especial Agraria buscará el restablecimiento de los derechos que hayan sido vulnerados a quienes acudan a sus mecanismos.
8. Beneficio, impacto y medición. Teniendo en cuenta la priorización, la Jurisdicción Especial Agraria deberá beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible.
9. Sustentabilidad. La Jurisdicción Especial Agraria promoverá la conservación y el buen manejo del suelo rural fértil que, en todo caso, es responsabilidad de sus propietarios o legítimos poseedores, para el desarrollo social, económico y ambiental equilibrado.
10. Participación, control social y transparencia. El Estado garantizará el ejercicio del derecho constitucional de participación ciudadana, control y transparencia de la gestión de todas las entidades que participan en la Jurisdicción Especial Agraria.
11. Prohibición del latifundio y de la concentración de la tierra rural. El Estado hará efectiva la prohibición del latifundio e impedirá la concentración de la tierra rural a lo cual contribuirán los mecanismos establecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 4A. Principios Procesales. Son principios de todos los procesos que conocerá Jurisdicción, los siguientes:

1. **Publicidad y nuevas tecnologías.** Las autoridades deberán promover mecanismos de publicidad eficaces, que faciliten la participación comunitaria, garanticen el conocimiento oportuno de los procedimientos a que se tienen derecho, así como de las decisiones y la posibilidad efectiva de contradicción y ejercicio de los derechos. Para tal fin se promoverá el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. **Especialidad e independencia.** La Jurisdicción Especial Agraria es independiente de cualquier otra especialidad. En la resolución de las controversias y litigios sobre los asuntos de que trata el artículo 7 de la presente Ley se deberán tener en cuenta las particularidades de las relaciones agrarias y rurales.
3. **Celeridad y economía procesal.** Las actuaciones, tanto en sede administrativa como judicial, se deben adelantar con austeridad y eficiencia, incorporando trámites sencillos e inteligibles para el ciudadano y evitando la dilación de los procedimientos, las decisiones inocuas y los recursos innecesarios. Se dotará a las autoridades de poderes correctivos para evitar maniobras o prácticas que atenten contra la celeridad de los procesos.



4. **Concentración.** Los Jueces Agrario y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias deberán programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrán aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza el Código General del Proceso o la norma que le sustituya o modifique.
5. **Inmediación.** Los Jueces Agrario y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias deberán presidir y adelantar las actuaciones procesales y judiciales que les correspondan. Los Jueces Agrarios podrán comisionar para la realización de actos procesales o las diligencias a los funcionarios con la competencia que les otorgue la Jurisdicción Especial Agraria.

Los Jueces Agrario y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias deberán practicar las pruebas decretadas, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la Ley 1564 de 2012, o la norma que le modifique o sustituya.

6. **Eficacia.** Atendiendo a la finalidad de esta Ley, se debe garantizar la materialización de los mandatos dispuestos, tanto en los procedimientos administrativos como judiciales, que diriman controversias en materia rural y agraria, así como la seguridad en el disfrute de los derechos reconocidos en cabeza de los ciudadanos sobre los cuales recaigan las decisiones.
7. **Oralidad.** En los procedimientos agrarios prevalecerá la forma verbal sobre la escrita. Las autoridades cumplirán sus actuaciones y permitirán la participación de los interesados de manera verbal.
8. **Decisión Integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la especialidad judicial agraria deberán propender por la obtención una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos.
9. **Coordinación y colaboración armónica.** Se implementará un procedimiento mixto que garantice la celeridad de los procesos agrarios en la identificación, individualización y georreferenciación de los predios objeto del mismo, así como la caracterización de los sujetos y la sustanciación de los conflictos agrarios y rurales a resolver por esta Ley.

Las entidades del Estado y demás autoridades nacionales y territoriales están obligadas a prestar su colaboración y apoyo para la efectiva administración de la justicia especial agraria en el país, por lo cual deberán trabajar de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.



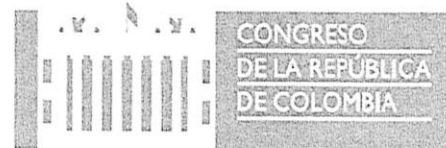
10. **Pluralidad.** Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta Ley para la resolución de conflictos de índole agrario y rural, se reconoce la pluralidad existente en el territorio nacional, así como la existencia de la Jurisdicción Especial Agraria como integrante de la Rama Judicial para la resolución de conflictos en comunidades étnicas legalmente reconocidas.
11. **Gratuidad.** Se garantizará la gratuidad a favor de los solicitantes de los trámites de que trata el presente artículo, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010, cuando se trate de personas de escasos recursos.

Parágrafo 1°. En todo caso, las comunicaciones y notificaciones se harán por escrito, por medio electrónico o por cualquier medio idóneo para garantizar el acceso a la información y a la justicia en todas las zonas del territorio nacional.

Artículo 5. Fuentes. Los Jueces Agrario y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias aplicarán la Ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de esta Jurisdicción Especial es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y principios generales señalados en el artículo primero, especialmente, el relativo a la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y de producción agraria.

Los Jueces Agrario y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias interpretarán y aplicarán las disposiciones procesales en armonía con los principios que inspiran esta Ley, la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, así como las declaraciones y principios que ofrezcan un mayor nivel de protección de derechos humanos, reconocidos en el país y, en cuanto no se opongan a ellos.

La costumbre y los usos servirán de fuente complementaria siempre y cuando amplíen, garanticen o mejoren la presente Ley, sin oponerse a ella.



CAPÍTULO II

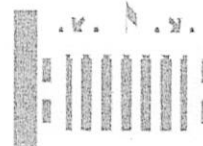
Creación, Organización, Priorización, Jurisdicción y Competencia

Artículo 6. Creación. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces creará los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Agrarios del Circuito, especializados en temas agrarios, de conformidad con el numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y normas concordantes. La misma Instancia creará los cargos de otros funcionarios que sean requeridos para el cumplimiento de esta Ley.

Parágrafo 1º. La creación de los cargos a que se refiere este artículo se hará en forma gradual y progresiva dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. Para ello, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces priorizará la creación de cargos en los territorios que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. "

Artículo 7. Asuntos sujetos a su trámite. Los órganos jurisdiccionales agrarios son competentes para conocer, independientemente de la naturaleza jurídica de los sujetos intervinientes, de todos los conflictos rurales que estén directamente relacionados con actividades o asuntos agrarios, o cuando versen sobre:

1. Los procesos de reivindicación previstos en el Título XII del Código Civil.
2. Las acciones posesorias consagradas en el Título XIII del Código Civil.
3. Las controversias sobre la administración de la copropiedad, localización de derechos proindivisos, divisiones materiales de fundos de carácter agrario y cualquier otra forma de titulación o rectificación de medida que deban tramitarse en la vía jurisdiccional.
4. Divisorios.
5. Servidumbres.
6. De saneamiento de la pequeña propiedad agraria y por conflictos entre comunidades relacionados con Hacinamiento Productivo Potencia (HPP) y falsas tradiciones.
7. De expropiación de predios rurales para fines distintos a los previstos en la normatividad agraria vigente, que traten sobre el mismo tipo de predios rurales.
8. De los originados en contratos como los de arrendamiento, aparcería y similares, agroindustriales y de compraventa de productos que sean del ámbito agrario.
9. De lanzamiento por ocupación de hecho.
10. De pertenencia.
11. De deslinde.
12. De los saneamientos de que trata el Título XXIII, Capítulo VII y VIII del Código Civil.

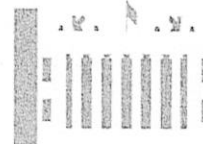


13. De los conflictos atinentes a empresas comunitarias, sociedades y asociaciones campesinas y agrarias.
14. De las acciones para la protección frente al uso, manejo y conservación del suelo, los recursos hídricos y el manejo ambiental.
15. Las acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas y pretensiones derivadas del aprovechamiento de aguas públicas para riego y avenamiento, y en general para su utilización en las actividades agrarias.
16. Los conflictos sobre la vocación y usos del suelo en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, páramos y territorios circunvecinos y colindantes.
17. Lo relacionado con el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al ambiente que generen un impacto directo en el sector agrario.
18. De los recursos contra las resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras que declaren, modifiquen o extingan derechos de los sujetos de reforma agraria.
19. De los recursos contra las resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras que declaren, modifiquen o extingan derechos y de aquellos procesos, acciones y recursos contenidos como competencia en el Decreto Ley 902 de 2017.
20. De la extinción de dominio a favor de la Nación, que tiene como fin proteger la función social y ecológica de la propiedad.
21. De la recuperación de tierras a favor de la Nación, incluida la de baldíos indebidamente apropiados u ocupados.
22. De los procesos de restitución de tierras ordenados por la Ley 1448 de 2011 que se encuentren en su etapa administrativa una vez agotada la vigencia de la misma.
23. Las controversias entre comunidades rurales y proyectos que incluyan la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) establecidas por la Ley 1776 de 2016.
24. De los procesos de clarificación, ampliación o constitución de resguardos coloniales y/o republicanos, así como de territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.

Parágrafo 1°. Quedan excluidas de esta Jurisdicción las acciones referidas a la aplicación o ejecución de leyes o contratos laborales de carácter subordinado, aun cuando se susciten en empresas, explotaciones o predios agrarios.

Parágrafo 2°. En aquellos casos en los que la Jurisdicción Especial Agraria tenga conocimiento de conflictos ambientales deberá darle prevalencia al criterio de «Justicia Ambiental».

Parágrafo 3°. Las controversias originadas en decisiones administrativas tendrán como requisito de procedibilidad el agotamiento de la vía gubernativa. "



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Artículo 8. Cláusula General de Competencia. En los casos donde surjan conflictos administrativos y judiciales que por su materia tengan impacto en la ruralidad y territorialidad campesina, estará sujeta a la competencia de esta jurisdicción por fuero de atracción.

Artículo 9. Órgano general de la competencia. La Jurisdicción Especial Agraria estará conformada por los siguientes órganos:

- a. La Sala Agraria de la Corte Suprema de Justicia.
- b. Las Salas Agrarias de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial.
- c. Los Juzgados Agrarios municipales y de Circuito Especializados

Artículo 10. Competencia funcional. La Sala Agraria de la Corte Suprema de Justicia conocerá únicamente del recurso de revisión.

Las Salas Agrarias de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial conocerán del recurso de apelación de los autos y sentencias que sean proferidas en primera instancia por los jueces agrarios especializados de circuito.

Los Jueces Agrarios Especializados del Circuito conocerán en primera instancia de la totalidad de los procesos agrarios, además de los contemplados en el artículo 7 de la presente Ley.

Artículo 11. Competencia Territorial. En los procesos agrarios, será competente, de modo privativo, el Juez Agrario del lugar donde estén ubicados los bienes. Si éstos se encuentran en varios municipios con distintas jurisdicciones, serán competentes el Juez Agrario y los Magistrados de la Sala Civil Agraria de la respectiva jurisdicción donde se presente la demanda.

Artículo 12. Iniciación e impulso de las actuaciones agrarias. Las actuaciones ante la Jurisdicción Especial Agraria podrán iniciarse:

- a. A petición de parte, por quienes acrediten un interés general.
- b. A petición de parte, por quienes acrediten un interés particular.
- c. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.
- d. Por las autoridades, oficiosamente."

Artículo 13. Requisitos para ser Juez Agrario. Los Jueces Agrarios, además de contar con idoneidad, ética y las demás condiciones establecidas en la Ley para ser Juez de Circuito, deberán cumplir necesariamente con los siguientes requisitos:

- a. Contar con experiencia certificada en asuntos agrarios o relacionados con temas de tierras, de por lo menos tres (3) años.
- b. Contar con experiencia certificada en derechos humanos, derechos de las víctimas y otras poblaciones y comunidades vulnerables, de por lo menos dos (2) años.



- c. Tener formación específica certificada en temas de Derecho Agrario.
- d. Tener formación específica certificada en derechos humanos, derechos de las víctimas y otras poblaciones y comunidades vulnerables.

Se valorará positivamente la experiencia de trabajo con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Artículo 14. Requisitos para ser Magistrado de los Tribunales Superiores. Los Magistrados de las Salas Especializadas Agrarias, además de contar con idoneidad, ética y las demás condiciones establecidas en la Ley, deberán cumplir necesariamente con los siguientes requisitos:

- a. Contar con experiencia certificada en asuntos agrarios o relacionados con temas de tierras, de por lo menos cinco (5) años.
- b. Contar con experiencia certificada en derechos humanos, derechos de las víctimas y otras poblaciones y comunidades vulnerables, de por lo menos tres (3) años.
- c. Tener formación específica certificada en temas de Derecho Agrario.
- d. Tener formación específica certificada en derechos humanos, derechos de las víctimas y otras poblaciones y comunidades vulnerables.

Se valorará positivamente la experiencia en trabajo con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Artículo 15. Concurso. El Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces realizará el concurso para el nombramiento de los Jueces Agrarios y los Magistrados de las Salas Civiles Agrarias.

Parágrafo 1°. Los exámenes de conocimiento para proveer los cargos de Jueces Agrarios y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias comprenderán en forma preponderante, temas de derecho agrario y políticas rurales.

Artículo 16. Estatuto de personal y carrera judicial. Las disposiciones sobre carrera judicial y las demás inherentes al estatuto de personal de la Rama Jurisdiccional, serán aplicables a los funcionarios y empleados de los juzgados agrarios y de las salas agrarias de los tribunales superiores de distrito judicial.

Artículo 17. Cursos de Derecho Agrario. El Gobierno dispondrá lo necesario y establecerá los convenios entre la Escuela Judicial y universidades, centros de estudios y otras organizaciones para ejecutar un Plan de Formación y Capacitación que necesariamente incluya aspectos jurídicos, catastrales y sociales en materia agraria, y sea ofertado a quienes aspiren a desempeñar o desempeñen los cargos de Jueces Agrarios, Magistrados de las Salas Civiles Agrarias y auxiliares de la Justicia Especial Agraria.

CAPÍTULO III

Mecanismos de Resolución de Conflictos

Artículo 18. Conciliación prejudicial. Antes de que se presente la demanda podrá ser solicitada la conciliación, por escrito o verbalmente, por la persona interesada ante un Juez Agrario, quien hará la citación correspondiente señalando día y hora con tal fin.

Si se llegara a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta redactada por el funcionario, quien, luego de hacer un resumen de los hechos y de las obligaciones de los interesados, dejará constancia de las obligaciones contraídas por las partes.

Artículo 19. Conciliación durante el trámite judicial. Desde el inicio del proceso y en cualquier etapa del mismo, el Juez Agrario exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento o menoscabo de derechos fundamentales de las partes.

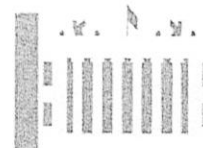
Artículo 20. Conciliación parcial. Si el acuerdo fuere parcial, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio las diferencias no conciliadas.

Artículo 21. Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriera a la respectiva audiencia. En este último evento, la secretaria judicial agraria expedirá el acta respectiva para continuar con el trámite judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 25.

Artículo 22. Representación de incapaces. Si el demandante, el demandado o alguno de quienes hayan de figurar como tales en el proceso fuere incapaz, tendrá facultad para celebrar la conciliación su representante legal.

El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a dicho representante para conciliar, cuando sea necesaria de conformidad con la Ley.

Artículo 23. Conciliación por entidades públicas. Los representantes de la Nación, Departamento, Intendencias, Comisarías, Municipios y Distritos Especiales no podrán conciliar controversias de naturaleza agraria sin autorización del Gobierno Nacional, Gobernador, Intendente, Comisario o Alcalde, según sea el caso.



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Artículo 24. Efectos de la conciliación. La conciliación y los trámites sometidos a la Ley 23 de 1991, según el parágrafo 1° del artículo 27 de la presente Ley, tendrán efectos de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del término que se hubiere señalado. Vencido dicho término, el acta en que conste la conciliación prestará mérito ejecutivo.

Artículo 25. De la falta de ánimo conciliatorio. En cualquier momento en que, las partes manifiesten al funcionario que no les asiste el interés de conciliar, aquél dará por terminado el trámite de conciliación y declarará esta fallida y expedirá el acta en que consignará previamente las pretensiones de las partes, los hechos que las fundamentan y las pruebas aportadas por ellas.

Artículo 26. Para los fines contemplados en la presente Ley, la conciliación podrá adelantarse en los centros de conciliación legalmente constituidos. El acta de conciliación solo prestará mérito ejecutivo una vez haya sido aprobada mediante auto de Magistrado de las Salas Civiles Agrarias.

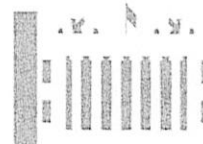
Parágrafo 1°. Los Jueces Agrarios y los Magistrados de las Salas Civiles Agrarias reconocerán los trámites sujetos a la Ley 23 de 1991 y concordantes que regulan o modifican dichas materias, revisarán de fondo el asunto sometido al trámite y luego de ser aprobada la conciliación, la misma tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo 2°. Los curadores ad litem no tendrán facultad para conciliar.

Artículo 27. Improcedencia de la conciliación. No podrá efectuarse la conciliación en los siguientes casos:

- a. Cuando no sea solicitada por la parte que sea sujeto de especial protección constitucional y a quien a través del mecanismo puedan vulnerársele sus derechos.
- b. Cuando el asunto no sea pasible de ser conciliado por expresa disposición legal.
- c. Cuando no medie certeza jurídica sobre la titularidad del bien objeto de la controversia.

Parágrafo 1°. Sobre las controversias que se diriman mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como los establecidos en la Ley 23 de 1991, procederá un recurso de revisión por parte de los Magistrados de las Salas Civiles Agrarias quienes se pronunciarán de fondo dentro de los 2 meses siguientes al conocimiento del acuerdo.



Artículo 28. En los procesos en que por sus características intervengan comunidades que tengan aspiraciones territoriales se deben contemplar los siguientes elementos:

- a. Caracterizaciones de los conflictos, realizadas por la Unidad Técnica Investigativa Agraria y la Defensoría del Pueblo, universidades públicas y privadas de reconocida idoneidad, grupos y centros de investigación en conjunto con las comunidades pretendientes. En todos los casos, la caracterización de conflictos, población y elementos ambientales deberá observar las reglas derivadas del debido proceso, derecho de defensa y contradicción, aporte y controversia de pruebas y demás necesarias para garantizar la imparcialidad, objetividad, transparencia y participación. Buena fe y demás principios implicados en el reconocimiento de derechos territoriales y culturales.
- b. Establecimiento de instancias de negociación como espacios exploratorios, agenda de encuentros, sistematización de acuerdos y debates
- c. Seguimiento de los resultados, realizado por la Procuraduría Delegada.

CAPÍTULO IV

Mecanismos Especiales para Mujeres

Artículo 29. Derechos de las Mujeres Rurales. La Jurisdicción Especial Agraria contemplará mecanismos que garanticen el acceso ágil, gratuito y oportuno a la justicia por parte de las mujeres rurales, de igual forma dispondrá de asesoría legal y formación especial para que las mujeres superen las barreras que dificultan la asignación, reconocimiento y la protección de sus derechos sobre la tierra.

Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la resolución de conflictos sobre uso, control y tenencia de la tierra.

Artículo 30. Con el fin de prevenir barreras de acceso a la justicia, se proveerán mecanismos especializados de intervención jurídica y social, con enfoque diferencial, para ofrecer orientación sobre solución de controversias y litigios, en favor de las mujeres rurales.

Artículo 31. En la ejecución de los procedimientos previstos en la presente Ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y demás grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.



CAPÍTULO V

Sobre el Amparo de Pobreza

Artículo 32. Amparo de pobreza. Se concederá el amparo de pobreza a las personas y comunidades que, manifiesten bajo la gravedad de juramento la imposibilidad de sufragar asistencia profesional a cualquier título, en los procesos objeto de esta Ley, sin distinción.

Si el demandante, el demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere integrante de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, u otra objeto de especial protección constitucional, el juez informará oportunamente a tales colectividades a través de su representante legal.

Artículo 33. Procedencia del amparo de pobreza. Para la concesión del amparo bastará la manifestación personal o por conducto de su representante, bajo juramento que se considerará prestado por la sola presentación de la solicitud, que se encuentra incurso en alguna de las causales taxativas del Código General del Proceso, o es un sujeto de especial protección constitucional.

Artículo 34. Actos improcedentes. No proceden el allanamiento a la demanda, el desistimiento de ella y la transacción que hagan los amparados por pobres o que se efectúen a nombre de ellos.

Artículo 35. Improcedencia de la caducidad. Si el demandante gozare del amparo de pobreza no habrá lugar a la caducidad de la acción.

Artículo 36. Aplicación de disposiciones del código general del proceso En lo no previsto en esta Ley se aplicarán los artículos 153 y 154 del Código General del Proceso.

Artículo 37. Quienes ejercen el Ministerio Público. El Ministerio Público será ejercido, en los procesos que correspondan a esta jurisdicción, por el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y los Procuradores Agrarios.

La Procuraduría dispondrá la creación de los cargos necesarios para que se garantice una adecuada cobertura en todo el territorio nacional.

Artículo 38. Defensa Pública. La Defensoría del Pueblo será encargada de proveer representación judicial técnica a las personas que previa verificación, se les haya declarado el amparo de pobreza.

El Estado dispondrá las apropiaciones presupuestales anuales necesarias para que garantizar una adecuada cobertura en todo el territorio nacional.



Artículo 39. Fallos extra y ultra petita y aplicación oficiosa de normas. Cuando una de las partes en el proceso agrario goce del amparo de pobreza, el Juez Agrario de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido y probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis. Por consiguientes, está facultado para reconocer y ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita siempre que los hechos que los originen o sustenten, están debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas el Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad la protección de los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas, así como de las comunidades afrodescendientes y sus territorios colectivos, entre otras personas y comunidades culturalmente diferenciadas.

Artículo 40. En casos de conflictos por Hacinamiento Productivo Potencial, los Jueces Agrarios y Magistrados de las Salas Civiles Agrarias podrán ordenar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la adjudicación de predios del Estado o baldíos, o la compra de predios a privados con el propósito de resolver las necesidades de tierras de las comunidades involucradas. En todo caso, estos mecanismos no afectarán las dinámicas de apropiación territorial, por lo que se harán prevalentemente in situ.

En los casos en los que no se pueda surtir el procedimiento anterior, se ordenará a las entidades del sector priorizar la implementación de Planes y Proyectos de adecuación de tierras, aumento de ingresos para el núcleo familiar y todos aquellos que garanticen la estabilización socioeconómica de las familias rurales que intervienen en estos conflictos.

Artículo 41. Otros poderes y deberes del juez. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley, y conforme a lo establecido en el Título IV del Código de Procedimiento Civil, serán facultades y, asimismo, deberes de los Jueces Agrarios y de los Magistrados de las Salas Civiles Agrarias:

1. Procurar que no se desvirtúen los fines y principios a que se refiere el artículo antes citado, en especial lo atinentes a la igualdad real de las partes ante la justicia, mediante la tutela de los derechos de la más débil, a la gratuidad de aquella, la simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones y, por ende, celeridad de los procesos, cuya paralización debe impedir, dándoles el impulso necesario, como también los relativos a la inmediación del juez y sana crítica en la apreciación de la prueba, todo ello sin menoscabo del principio fundamental del debido proceso.
2. Desechar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no están legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.

3. Rechazar el allanamiento de la demanda, el desistimiento de ella y la transacción cuando el demandado, en el primer caso, el demandante en el segundo y cualquiera de ellos, en el tercero, gocen del amparo de pobreza.
4. Precaver, cuando tome medidas con relación a un predio, riesgos consiguientes de paralización de la explotación del mismo y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, en lo pertinente, a los Magistrados de las Salas Civiles Agrarias. "

Artículo 42. Prevalencia de lo agrario. Si en el asunto de que se trata están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerá la índole de los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso.

Artículo 43. Decisión de la controversia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial. Cuando hubiere controversia sobre el carácter agrario de la relación o del bien a que se refiere el proceso, se remitirá para su calificación al correspondiente Tribunal Superior de Distrito Judicial. Mientras tanto se suspenderá el procedimiento.

El tribunal decidirá, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente, con base en las pruebas que obren en el mismo. Si la discusión versa sobre la naturaleza de un predio y las pruebas que obran en el expediente no fueren suficientes, el tribunal solicitará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi un informe sobre la ubicación del inmueble con relación al perímetro urbano y sobre la destinación del mismo, que deberá ser remitido en los quince (15) días siguientes a la emisión del auto.

A partir de la fecha de recepción del informe comenzará a correr el término previsto en el segundo inciso de este artículo. "

CAPÍTULO DE AUDIENCIAS

Artículo 44. Las audiencias y diligencias agrarias se registrarán por los procesos declarativos estipulados en los artículos 368 al 389 del Código General del Proceso que versan sobre el proceso verbal, siempre y cuando no se encuentren sujetos a trámites especiales

Artículo 45. Traslado de la demanda Admitida la demanda se correrá traslado al demandado por el término de veinte (20) días. Si el demandado propone excepciones de mérito, se correrá traslado al demandante por cinco (5) días en la forma prevista en el artículo 110 del Código General del Proceso para que este pida pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan.



Artículo 46. Audiencia inicial El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria convocara a las partes y a sus apoderados o representantes legales para que concurran personalmente a una audiencia donde se practicarán interrogatorios a las partes. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.

Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar ningún concepto, interrogará a los interesados acerca de los hechos que originen la diferencia con el fin de determinar con la mayor precisión posible los hechos, y en seguida los exhortará para que procuren un acuerdo amigable, pudiendo proponer las fórmulas de avenimiento que estime equitativas.

En la misma providencia, El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio a la conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas, decreto de pruebas y los demás asuntos relacionados con esta audiencia inicial y se regirá bajo los mismos preceptos del artículo 372 del Código General del Proceso.

Artículo 47. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 373 del Código General del Proceso.

Artículo 48. Publicidad de las Audiencias. A menos que exista causa justificativa o peligro inminente de las partes involucradas en el proceso, las audiencias serán públicas.

Artículo 49. Concentración de Audiencias y Diligencias Cuando fueren previsibles varias audiencias o diligencias, El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria señalará inmediatamente fechas continuas para realizarlas. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse, diferirse o suspenderse por más de una vez para un día diferente de aquél que fue inicialmente señalado.

Artículo 50. Acta de Audiencia. El secretario extenderá un acta sobre lo actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Especializada y las partes.

Artículo 51. Requisito de procedibilidad. En todo proceso declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario, deberá el juez procurar la conciliación de la controversia, una vez contestada la demanda.

También podrá efectuarse la conciliación a petición de las partes, de común acuerdo, en cualquier etapa del proceso.

Artículo 52. Salvo lo dispuesto en norma especial se aplicarán en materia de pruebas las siguientes reglas:

1. En el auto en que se decreten pruebas, El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria señalará fecha y hora de la audiencia en que habrán de practicarse.
2. Si el número de pruebas o su naturaleza hiciere necesario que se realicen varias audiencias para practicarlas, El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria señalará de una vez fecha y hora para realizar cada una de ellas.
3. El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria decretará de oficio las pruebas que considere útiles o necesarias.
4. Si hubiere hechos que comprobar en un predio, El Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria decretará necesariamente una inspección judicial si ninguna de las partes la hubiere pedido.

Artículo 53. Las notificaciones se regirán por los artículos 289 y siguientes del Código General del Proceso, buscando la práctica de la notificación personal mientras esta fuere posible, en especial a lo concerniente al auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo.

Artículo 54. Notificación por Aviso. Cuando no hubiere sido posible notificar personalmente a quien habite en zona rural, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la respectiva providencia, la notificación se hará por medio de aviso que se fijará en la puerta de acceso al lugar donde habita o trabaja la persona que deba ser notificada o de la casa principal o en sitio visible del predio de que se trata.

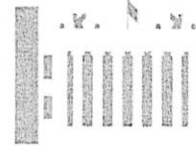
Se entregará copia del aviso a la persona que manifiesta que trabaja o habita en ese lugar. Dicha persona firmará la copia que conserva el notificador la cual se agregará al expediente. Si se niega a firmar, se dejará la respectiva constancia. Simultáneamente, se fijará el aviso en el sitio que el Juez Agrario o Magistrado de la Sala Civil Agraria considere de mayor concurrencia pública y se leerá por medio de una radiodifusora de lugar o de la región, si la hubiere.

De la fijación y radiodifusión del aviso se dejará constancia en el expediente.

Salvo disposición especial en contrario, la notificación se entenderá surtida dos (2) días después de la fijación del aviso en uno de los sitios indicados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 55. Notificación en estrados. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias quedan notificadas inmediatamente después de proferidas, aunque no hayan concurrido las partes.

Artículo 56. Notificaciones por estado Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario. Este tipo de notificación se regirá a partir del artículo 295 del Código General del Proceso



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Artículo 57. Recurso de Revisión. Procederá el Recurso de Revisión de acuerdo a lo establecido en el Código General del Proceso.

Artículo 58. Procedencia el Recurso Extraordinario de Revisión. Procede contra las sentencias ejecutoriadas. El recurso de revisión en materia agraria se regirá según lo dispuesto en los artículos 354 a 360 del Código General del Proceso.

Artículo 59. Causales. Son causales de revisión las estipuladas en el artículo 355 del Código General del Proceso.

Artículo 60. Medidas cautelares. Las medidas cautelares serán ordenadas de acuerdo a lo establecido en el Código General del Proceso.

CAPITULO IX

Unidad Técnica Investigativa Agraria (UTIA)

Artículo 61. Creación de la Unidad Técnica Investigativa Agraria - UTIA. Créase la Unidad Técnica Investigativa Agraria (UTIA) para el apoyo de las funciones de la Jurisdicción Especial Agraria. El Gobierno Nacional reglamentará los cargos y demás personal profesional, técnico y operativo que se requiera para atender todas las disposiciones administrativas relacionadas.

Artículo 62. Dependencia. La Unidad Técnica Investigativa Agraria hará parte de la Rama Judicial, específicamente, de la Jurisdicción Especial Agraria.

Artículo 63. Funciones. Serán funciones de la Unidad Técnica Investigativa Agraria las siguientes:

1. Acopiar las pruebas necesarias para los procesos atribuidos a conocimiento de la Jurisdicción Especial Agraria.
2. Identificar física y jurídicamente los predios objeto de los procedimientos que competen a la Jurisdicción Especial Agraria. En los casos en que los predios no cuenten con información catastral o registral, ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la consecuente apertura de folio de matrícula a nombre de la Nación y que se les asigne un número de matrícula inmobiliaria.
3. Realizar inspección ocular a los predios objeto de los procesos.
4. Informar a las partes el estado de su proceso o trámite cuando así lo requieran.
5. Las demás funciones afines con sus objetivos que le señale la Ley.



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Parágrafo 1º. La Fiscalía General de la Nación y las autoridades militares y de policía prestarán el apoyo y colaboración que sea requerida por parte de la Unidad Técnica

Investigativa Agraria para el desarrollo de las funciones previstas en los numerales 2 y 3 de este artículo.

Artículo 64. Acceso a la información: La Unidad Técnica Investigativa Agraria tendrá acceso a todas las bases de datos sobre tierras y territorios del país, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de los catastros descentralizados, de las notarías, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de las oficinas de registro de instrumentos públicos, del Catastro Multipropósito una vez entre en vigencia, entre otros.

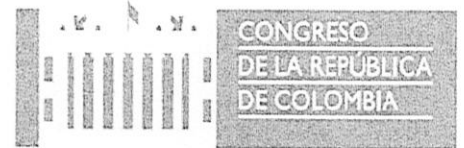
Para estos efectos, las entidades dispondrán de servicios de intercambio de información en tiempo real con la Unidad Técnica Investigativa Agraria, con base en los estándares de seguridad y políticas definidas por las estrategias de Gobierno en Línea.

En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el intercambio de información en tiempo real, los servidores públicos de las entidades y organizaciones respectivas deberán entregar la información en el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la solicitud. Los servidores públicos que obstruyan el acceso a la información o incumplan con esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Artículo 65. Régimen de transición y vigencia. Esta ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación y solo se aplicará a los procesos cuyas demandas se instauran con posterioridad a su entrada en vigor.

Las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. Si a la entrada en vigencia de esta ley, no hubieren empezado a funcionar los jueces agrarios y rurales de ambas especialidades, serán competentes para conocer las demandas sobre estos asuntos, conforme al régimen jurídico de competencias anterior, los jueces promiscuos, los jueces municipales, los jueces civiles del circuito, los jueces administrativos, las Salas Civiles de los Tribunales Superiores del Distrito, los Tribunales Administrativos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Primera del Consejo de Estado.

Las anteriores reglas de competencia se mantendrán hasta la decisión judicial que cierre cada proceso; por lo tanto, los asuntos iniciados con anterioridad a su creación, no se trasladarán a los jueces y magistrados rurales y agrarios.

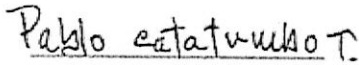
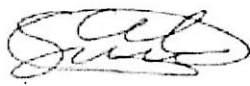


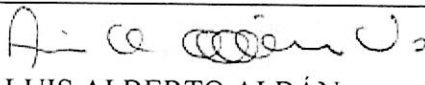



Parágrafo 1º. Los siguientes procesos serán enviados a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el estado en que se encuentren, incluso si hubieran entrado al despacho para fallo. Estos procesos se resolverán de acuerdo con las normas que los regulaban con anterioridad a la vigencia de la presente ley:

1. Nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
2. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.
3. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

Parágrafo 2º. Los procesos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se podrán acumular a los iniciados con posterioridad a ella, conforme al proceso establecido en esta ley, aunque el trámite sea distinto.

De los honorables congresistas,

 PABLO CATATUMBO Senador de la República	 SANDRA RAMIREZ Senadora de la República
 JULIÁN GALLO CUBILLOS Senador de la República	 CARLOS ALBERTO CARREÑO Representante a la Cámara
 LUIS ALBERTO ALBÁN Representante a la Cámara	 JAIRO REINALDO CALA Representante a la Cámara



 OMAR DE JESÚS RESTREPO Representante a la Cámara	 IMELDA DAZA COTES Senadora de la República Partido Comunes
 PEDRO BARACUTADO Representante a la Cámara Partido Comunes	 GERMÁN GÓMEZ Representante a la Cámara Partido Comunes

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 26 del mes julio del año 2022

se radicó en este despacho el proyecto de ley
Nº. 56. Acto Legislativo Nº. _____, con todos y

cada uno de los requisitos constitucionales y legales

por: H.S. Julian Gallo Ceballos, Pablo Catartombá, Sandra Ramírez,
Imelda Daza Cotes; Carlos Alberto Carrero, Luis Alberto
Albán, Jairo Reinaldo Cala, Omar de Jesús Restrepo, Pedro
Baracutao, Germán Gómez.

SECRETARIO GENERAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente exposición de motivos se desarrollará en el siguiente orden: (i). Se realizarán unas consideraciones generales en cuanto al objetivo, (ii) El contexto que origina el proyecto de ley; (iii) Cifras que respaldan el proyecto de ley; (iv) articulado propuesto.

I. Objetivo:

El Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz Estable y duradera, en adelante A.F., otorgo a la sociedad colombiana un conjunto de herramientas para develar los orígenes estructurales del conflicto en nuestro país, particularmente, el punto 1 del A.F, consiguió sentar las bases para garantizar el bienestar del campesinado colombiano.

En este sentido la Reforma Rural Integral (RRI), logro consolidar planteamientos , en materia de acceso a la tierra, actualización de la propiedad rural, vías terciarias , la creación de un catastro multipropósito para actualizar la información del campo colombiano, genero una nueva propuesta de intervención estatal para disminuir la brecha entre el campo y la ciudad entre otros, adicional a todo ello, el Acuerdo, propuso la creación de una jurisdicción agraria , con el fin de resolver los conflictos agrarios y territoriales, todo de la mano de las comunidades y aplicando los enfoques transversales.

De igual manera, el multiculturalismo constituye uno de los pilares fundacionales de la Constitución de 1.991, el cual fundamenta la proyección normativa, axiológica y la política estatal. Sin embargo, a 32 años de su expedición, se advierten incompletudes y exclusiones que aumentaron la conflictividad preexistente a la de 1.991 y se crearon nuevos conflictos en donde habitan comunidades rurales que hoy se disputan derechos como la tierra, el territorio y la gobernabilidad, en ocasiones, en forma violenta, sin que se vislumbre una ruta clara del Estado para resolverlos. En el fondo, se ha evadido la discusión de las ciudadanías rurales negadas, incompletas, disminuidas, asimétricas, excluyentes y poco participativas, que caracterizan el andamiaje jurídico colombiano, junto a la falta de garantías reales para la permanencia pacífica en el territorio de todas las culturas, sin discriminación.

Se propone reconocer los puntos de intersección entre afrodescendientes, campesinado e indígenas, como puentes de diálogo intercultural para la convivencia pacífica y la tramitación de conflictos jurídicos. Existen identidades ubicadas entre lo *"uno y lo otro, como lo mismo"*, que rompen la idea limitada que predomina sobre los habitantes del campo. Empero, vencer los reduccionismos, la substancialización del sujeto y las culturas, implica,

así mismo, una teoría del Estado, del Derecho, de los derechos y de la justicia desde el sujeto intercultural.

Es por ello, que se propone una Justicia rural intercultural e integral que rompa con el actual modelo de justicia, es decir, se propone una interacción horizontal entre culturas y entre culturas-Estado, en lugar de las iniciativas a puerta cerrada que proponen reconocer reducidamente estas prácticas sociales, manteniendo la hegemonía cultural y jurídica de la "última palabra en el derecho"¹. Al respecto, se debe trabajar en esquemas de coordinación inter-jurisdiccional e intercultural entre las competencias de la jurisdicción judicial y administrativa estatal y las que correspondan a las tres o más culturas que integren una especialidad de sujetos y comunidades interculturales, en términos de colaboración mutua, respeto, armonía e integralidad.

Así mismo, no se puede desconocer el ingreso de la justicia transicional en el derecho colombiano y en el que existen precedentes que se han enfrentado al debate entre la justicia transicional, que contempla un componente de justicia "étnica", en la que tienen asiento indígenas y afrodescendientes entre las magistraturas y procedimientos² que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz³.

II. Contextualización del Proyecto:

El aumento exponencial de conflictos agrarios y rurales acompañados de la falta de acceso a la justicia por parte de la población campesina, llaman a la necesidad de establecer una jurisdicción agraria en Colombia.

En el informe especial "Tierras y Desarrollo Rural", elaborado por el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Revista Semana advierten que el 94 por ciento del territorio del país es rural y el 32 por ciento de la población vive allí. Tales cifras ilustran el panorama de la ruralidad colombiana. El campo colombiano es el escenario de conflictos relacionados con el uso y tenencia de la tierra. El aumento exponencial de conflictos agrarios y rurales acompañado de la falta de acceso a la justicia por parte de la población campesina, llaman

¹ El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, publicó entre 2019-2020, una propuesta de *especialidad agraria*, dentro de la estructura de la actual jurisdicción contenciosa administrativa en la que reconoce marginalmente formas tradicionales de resolución de algunos conflictos rurales de mediana relevancia jurídica, pero mantiene la hegemonía en materia de la decisión sobre aspectos como la tierra (Ámbito Jurídico, 2018).

² Ver Ley 1922 de 2018, artículo 70.

³ Se recomienda consultar la Sentencia T-365 de 2018 (Corte Constitucional, 2018) en la que se juzgó a un excombatiente de la extinta guerrilla de las FARC (por sus siglas) al haber causado muerte violenta a un mayor de una comunidad indígena distinta a la que integraba antes de ser insurgente, por lo que implicó una integración de la justicia indígena de las comunidades involucradas, la jurisdicción transicional y la constitucional que dirimió esa controversia por vía constitucional.



a la necesidad de establecer una auténtica jurisdicción agraria comprendida por la existencia de un colegiado de jueces y magistrados expertos que se dediquen exclusivamente a dirimir este tipo de controversias.

El Estado colombiano se ha comprometido a establecer una solución que le permita dar respuesta a los conflictos que históricamente han afectado al campesinado. A través del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a poner en marcha una "nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra".

La idea es crear una jurisdicción con ánimo de permanencia, con características propias a las dinámicas rurales, para reforzar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los principales destinatarios de esta jurisdicción agraria son los campesinos, indígenas y afrodescendientes. La Corte Constitucional ha afirmado que el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional y que por eso tiene derecho a un tratamiento especial por parte del Estado, lo que abarca políticas públicas con enfoque diferencial, y por ende una justicia especializada que conozca las dinámicas rurales y cuente con un estatuto procesal integral para la intervención judicial.

III. Cifras

Los conflictos sobre la tierra son tres veces mayores en las zonas rurales que en las zonas urbanas: mientras que a nivel nacional el 0,1% de las personas que han experimentado un problema, desacuerdo, conflicto o disputa corresponden a problemas de propiedad, uso y tenencia de la tierra, en los centros poblados y rural disperso esta cifra corresponde a 0,3%^[1].

"las personas a nivel nacional que experimentaron un problema de propiedad, uso y tenencia de la tierra y acudieron a una institución o entidad, reportaron que acudieron a diversas instituciones o entidades, pues no hay una entidad o institución típica a la que acudan las personas que presentan este problema. Estas personas recurrieron a las siguientes instituciones o entidades: abogado; alcaldías o gobernaciones; catastros, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Curadurías Urbanas o lonjas; Defensoría del Pueblo; e inspección de Policía. Y, cero personas acudieron a juzgados o jueces^[2]".

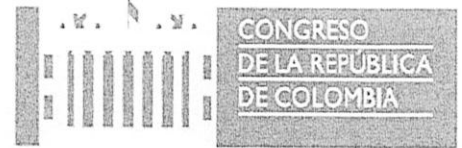
Los procesos agrarios podrían alimentar de manera significativa el Fondo de Tierras, si se hiciera una gestión eficiente que cumpliera con las disposiciones contenidas en las Ley 160 de 1994 y en la Sentencia T 488 de 2014 de la Corte Constitucional que ordenó a la ANT la implementación de un plan nacional de clarificación de baldíos, ya que los mayores resultados logrados en la inclusión de hectáreas al Fondo de Tierras se tienen a partir de procesos de clarificación (93,7)[3]

Preocupa que el 81.5% de los procesos agrarios inventariados aún estén en la fase preliminar de solicitud de inicio de proceso (30.196 procesos de los 37.041 identificados), el otro 10% en conformación del expediente en apertura de trámite administrativo (etapa intermedia), y sólo el 3% está en etapa final que incluye los concluidos y los archivados definitivamente. No se tiene un plan para la atención de estos procesos, lo cual puede desencadenar en un rezago monumental que impactan 1.547.115 hectáreas aproximadamente que tienen el potencial de cumplir el 50% de la meta del Fondo de Tierras. Estamos ante un inventario de procesos en curso, más no de tierras disponibles en el Fondo. [4]

A nivel general el 93% de los procesos agrarios se adelantan bajo el DL 902, lo cual aumenta la urgencia de la creación de la jurisdicción agraria que debe entrar a conocer de la etapa judicial del procedimiento único de los procesos agrarios que adelanta la ANT y que deberían en un futuro alimentar el Fondo de Tierras, se tiene que los departamentos del país donde mayor se concentra la gestión son Boyacá (31.9%), Córdoba (12%) y Cundinamarca (9.8%). Esto reitera el hallazgo sobre la falta de focalización de la gestión institucional de la ANT respecto a las regiones priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz.[5]

Que el 41,7% de la gestión que debe alimentar al Fondo de Tierras a partir de procesos agrarios se centre en Boyacá y Cundinamarca confirma que la ANT muestra actuaciones agrarias ordinarias sin que se evidencien avancen la implementación del Acuerdo de Paz.[6]

Analizados los procesos agrarios que se concentran en los municipios PDET, se encontró que el 93,6% de los procesos agrarios que adelanta la ANT no coinciden con zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz. Del 6.4% de los procesos agrarios adelantados en zonas PDET, el 2,2% se desarrollan en Alto Patía - Norte del Cauca y el 1% en Sur de Córdoba. Las restantes zonas PDET tienen una muy baja gestión de procesos agrarios. Un reto para la ANT y el MADR es el de culminar las bases de datos actuales e históricos de titulación de baldíos, procesos agrarios y predios del extinto Fondo Nacional Agrario – FNA y la reconstrucción, organización y digitalización de la documentación y de los expedientes que se conformaron con los trámites adelantados por el Incora y el Incoder, que permitan un completo inventario de los predios baldíos en procesos agrarios que alimentan el Fondo de Tierras[7]



La efectividad en el trámite y cumplimiento de las decisiones en los procesos agrarios, será de las fuentes principales para que el Fondo de Tierras y su redistribución sea una realidad. Para ello, la ANT deberá hacer un plan riguroso de corto y mediano plazo que supere las falencias jurídicas, técnicas, operativas y de gestión y le permitan atender el 100% de los 37.041 procesos agrarios en curso.[8]

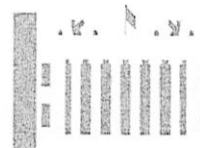
Con fundamento en las anteriores consideraciones, ponemos en consideración del honorable Congreso de la República este Proyecto de Ley que corresponde con las necesidades del campo colombiano.

Relación de Posibles Conflictos de Interés

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones, que modifica el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del proyecto y el ponente presentarán en la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, se considera que el presente proyecto de ley no genera conflictos de interés en atención a que se trata de un proyecto que no genera un beneficio particular, actual y directo a los congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019; sino que, por el contrario, se trata de la creación de una norma general, por tanto, el beneficio no puede ser particular.

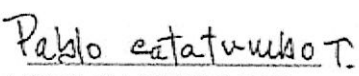
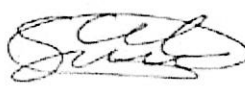
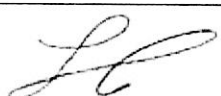
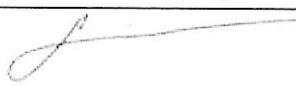
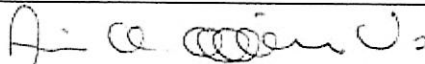

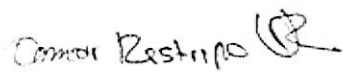

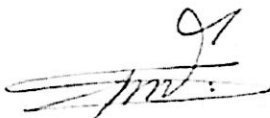
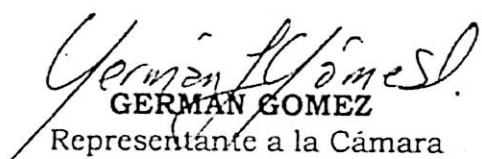
Sobre este asunto ha señalado el Consejo de Estado “No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”⁴.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación número: PI. 01180-00 (C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia).



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

De los honorables congresistas,

 PABLO CATATUMBO Senador de la República	 SANDRA RAMIREZ Senadora de la República
 JULIÁN GALLO CUBILLOS Senador de la República	 CARLOS ALBERTO CARREÑO Representante a la Cámara
 LUIS ALBERTO ALBÁN Representante a la Cámara	 JAIRO REINALDO CALA Representante a la Cámara
 OMAR DE JESÚS RESTREPO Representante a la Cámara	 IMELDA DAZA COTÉS Senadora de la República Partido Comunes
 PEDRO BARACUTADO Representante a la Cámara Partido Comunes	 GERMÁN GÓMEZ Representante a la Cámara Partido Comunes



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Referencias:

- [1] DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.
- [2] DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019
- [3] PROCURADURIA 2021. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz
- [4] PROCURADURIA 2021. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz
- [5] PROCURADURIA 2021. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz
- [6] PROCURADURIA 2021. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz
- [7] PROCURADURIA 2021. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz
- [8] PROCURADURIA 2021. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 26 del mes Julio del año 2022

se radicó en este despacho el proyecto de ley

Nº. 56 Acto Legislativo Nº. _____, con todos y

cada uno de los requisitos constitucionales y legales

por: H.S. Julian Gallo Cubillos, Pablo Cachatombó, Sandra Ramirez,
Imelda Daza Cotes; Carlos Alberto Carrero, Jairo Alberto Albain,
Jairo Reinaldo Cala, Omar de Jesús Restrepo, Pedro Baracuta,
German Bomez.

SECRETARIO GENERAL